

Promovamos la seguridad, el acceso a la justicia y la gobernabilidad democrática en la agenda de desarrollo pos 2015

Una declaración regional

Latinoamérica y el Caribe están en una encrucijada. Pese al progreso político, social económico experimentado por la mayoría de los países de la región, muchos de ellos son confrontados con tasas endémicas de violencia. La región cuenta con el 8 por ciento de la población mundial, sin embargo, el 36 por ciento de los homicidios en el mundo ocurren aquí. Al menos 14 países de Latinoamérica y del Caribe exhiben las más altas tasas de feminicidio. Más de 40, entre las 50 ciudades más violentas del mundo, se encuentran aquí. Nuestra región es una de las pocas donde la violencia letal y la victimización están creciendo. Aunque los Estados no están afectados de manera homogénea, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son preocupaciones comunes en todos los gobiernos y la sociedad civil.

A pesar de ello, hay oportunidades reales para mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y la gobernabilidad en Latinoamérica y el Caribe. Muchos líderes de la región ya han invertido en políticas y acciones que han contribuido para disminuir la inseguridad real y la percibida. Estas iniciativas incluyen medidas focalizadas en hot spots y grupos vulnerables, intervenciones de prevención como la promoción de educación y del empleo y finalmente, políticas sociales participativas que actúan directamente en las causas y en el origen del crimen y de la violencia. Las innovaciones en seguridad puestas en práctica en Latinoamérica y el Caribe ofrecen modelos que pueden ser generados en toda la región y en otras partes del mundo que han empezado a enfrentar los mismos desafíos.

Los exitosos Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs) fueron una herramienta valiosa para provocar a los gobiernos a tomar medidas y a promover estándares mínimos de desarrollo. Sin embargo, no han logrado incluir cuestiones importantes sobre la paz, la seguridad, la justicia y la gobernabilidad, centrales para el respeto a los derechos humanos básicos, incluso el derecho a vivir en un contexto seguro. Investigaciones internacionales y nacionales muestran que el desarrollo de Latinoamérica y del Caribe se han visto afectados o mismo revertidos por la inseguridad y la injusticia. Mientras tanto, inversiones basadas en evidencia focalizadas en la prevención de la violencia y en la mejora del acceso a la justicia están empíricamente asociados a dividendos de desarrollo positivos, especialmente en los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

Mientras los Estados miembros de las Naciones Unidas deciden sobre el contenido de la próxima generación de Objetivos del Desarrollo Sustentable para los próximos 15 años, la región tiene la oportunidad única de destacar la importancia de la paz, la seguridad, la justicia y la gobernabilidad. Los costos de la inacción serán severos. La inseguridad personal y del hogar es estadísticamente correlativa a la reducción de estándares de vida e impacta directamente en el desarrollo sustentable. Para promover sociedades verdaderamente inclusivas, justas y seguras, las causas y síntomas de la violencia, la impunidad y la corrupción deben ser tratados. El progreso de la sociedad no se mide solamente por los avances económicos y el crecimiento, sino, también por la calidad de vida, incluyendo el acceso a la justicia y el derecho a vivir libre del miedo.

Latinoamérica y el Caribe tienen un interés central en el futuro de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Ciertamente, representan visiones e intereses diversos, pero los países de la región comparten al menos tres prioridades comunes que deben ser reflejadas en la agenda pos-2015. En primer lugar, las tasas crecientes en las manifestaciones de las violencias y la inseguridad están minando las posibilidades de desarrollo en la región. En segundo lugar, la confianza pública en las instituciones estatales está siendo erosionada por su incapacidad para abordar estos desafíos. Y en tercero, el acceso a la justicia y la gobernabilidad son hoy más una aspiración que una realidad. El crimen organizado e interpersonal, incluso la violencia contra las mujeres y niñas, está continuamente minando las libertades y los derechos fundamentales.

Los gobiernos y sociedad civil de la región están comprometidos con un orden multilateral eficiente que garantice el desarrollo sustentable e inclusivo para todos y todas. Para que sean implementados con suceso, los Objetivos del Desarrollo Sustentable deben convocar a los países para la cooperación global por una agenda común que garantice el acceso a la justicia y a la seguridad para los 7.1 billones de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños (y los 9.6 billones previstos en 2050). Además de asegurar que a las poblaciones más pobres y vulnerables se les respeten sus derechos más básicos. La violencia, la justicia y la impunidad no son únicos en la región: son problemas que afectan a los países de alta renta tanto como a aquellos de mediana y baja renta.

Las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y del Caribe apuestan por Objetivos del Desarrollo Sustentable que coloquen la paz, la seguridad, el acceso de justicia y la gobernabilidad en el centro del desarrollo.

Ciudad de México, noviembre 7 de 2014.

ABONG, Brasil

Alejandra Mohor, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Chile

Arturo Matute, Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, Guatemala

Campaña Colombiana contra Minas, Colombia

Carlos Vilalta, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México

Claudio Beato, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), Brasil

Fundación Ideas para la Paz, Colombia

Ignácio Cano, Laboratório de Análise de Violência, UERJ, Brasil

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Nicaragua

Instituto Igarapé, Brasil

Instituto Sou da Paz, Brasil

Insyde, México

Jorge Soto, Data4 and Citivox, México

Jose Lobo Carrillo, consultor Open Society Foundations (OSF), México

José Luiz Ratton, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da UFPE (NEPS-UFPE), Brasil

John de Boer, especialista independiente, Canadá

Julia Monarrez, El Colegio de la Frontera Norte, México

Julita Lemgruber, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC-UCAM)

Luis Armando Castro, Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), El Salvador

Markus Gottsbacher, experto independiente, Canadá

Melina Risso, experta independiente, Brasil

Paula Miraglia, experta independiente, Brasil

Pedro Abramovay, Open Society Foundations (OSF), Brasil

Pedro Cruz, experto independiente, El Salvador

Pedro Strozenberg, Instituto de Estudos da Religião (ISER), Brasil

Promundo, Brasil

Renato Sergio de Lima, Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e FGV Direito SP, Brasil

Tarik Weekes, especialista independiente, Jamaica

